

FOR IMMEDIATE RELEASE

July 8, 2020

Aidan O'Shea, Public Justice - aoshea@publicjustice.net

Kara WatkinsChow, Berlin Rosen - kara.watkinschow@berlinrosen.com

Empacadores de carne y aliados a escala nacional presentan un Reclamo de discriminación racial para desafiar las acciones de la Corporación de procesamiento de carne, alegando discriminación racial en la desastrosa respuesta COVID-19

La queja administrativa argumenta que el USDA debe poner fin al apoyo federal para las corporaciones dominantes de procesamiento de carne sin tomar en cuenta las vidas y el bienestar de los negros, latinos y asiáticos

Una coalición nacional de organizaciones que abogan por los trabajadores de procesamiento de carne, y grupos aliados, presentaron una queja administrativa de derechos civiles ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos alegando que, aparte de ser desastroso para el bienestar de los trabajadores y la salud pública, dos de las corporaciones principales en procesamiento de carne se han involucrado en la discriminación racial prohibida por la Ley de Derechos Civiles a través de sus políticas laborales durante la pandemia COVID-19.

La queja alega que las megacorporaciones Tyson y JBS han adoptado políticas que rechazan las pautas críticas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como el distanciamiento social en las líneas de procesamiento de carne para detener la propagación de COVID-19 en sus corporaciones y que los resultados de sus procedimientos operativos actuales tienen un impacto discriminatorio en la fuerza laboral predominantemente negra, latina y asiática en las plantas de las dos compañías.

Debido al dinero federal que fluye a las corporaciones en forma de contratos federales del programa de nutrición Farm Bill y del Programa de Mitigación del Comercio, este impacto desigual viola la ley federal de derechos civiles. Los demandantes solicitan que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. suspenda, rescinda y se niegue a proporcionar asistencia financiera a estas dos empresas como resultado de esta discriminación racial, y que remita la queja al Departamento de Justicia para que tome medidas.

Los reclamantes en esta queja administrativa son Food Chain Workers Alliance, Rural Community Workers Alliance, HEAL Food Alliance, Forward Latino, American Friends Service Committee - Iowa, y la Organización de Consejos de Recursos de Idaho. Están representados por Public Justice, Nichols Kaster PLLP y Towards Justice.

Según la queja presentada hoy, "Las políticas discriminan en base a raza causando un efecto adverso sustancial en los trabajadores negros, latinos y asiáticos. Además, los hechos disponibles públicamente indican un patrón o práctica de discriminación. Las desigualdades sociales existentes agravan esta discriminación para los trabajadores negros y latinos, incluyendo las tasas de mortalidad más altas y las tasas de hospitalización más altas que las personas blancas".

A partir del 6 de julio, el Food & Environment Reporting Network informa que hay al menos 292 plantas empacadoras con casos confirmados, con al menos 40,081 trabajadores dando positivo y muriendo al menos 138 trabajadores del COVID-19. A partir del 7 de julio, el Centro de Informes de Investigación del Medio Oeste documenta que Tyson y JBS tienen el primer y el segundo número de casos de COVID-19 vinculados en sus instalaciones, respectivamente, con un total combinado de al menos 12,495 casos positivos. Los reclamantes en esta acción alegan que las políticas de Tyson y JBS rechazan el distanciamiento social entre los trabajadores con un mínimo de seis pies de separación, como lo exige el CDC. Esto afecta a los trabajadores al aumentar el riesgo de contraer COVID-19. La queja alega que las políticas cumplen el objetivo de la capacidad de procesamiento previo a la pandemia.

Datos recientes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades corroboran esta queja. El 7 de julio de 2020, el CDC publicó datos recopilados hasta el 31 de mayo de 2020, analizaron el impacto del disparaje de COVID-19 sufrido por los trabajadores en las instalaciones de procesamiento de carne y discutieron las medidas implementadas, o lo que es más importante, no implementadas en tales instalaciones. El Informe de Disparidad del CDC descubrió que según 21 estados que informan sobre datos de raza y etnia, "los trabajadores hispanos y asiáticos podrían verse afectados de manera desproporcionada por COVID-19 en este entorno laboral". El Informe no identifica ninguna instancia de instalaciones que reporten la adopción de la medida mínima de distancia social de 6 pies para proteger a los trabajadores en las líneas de procesamiento.

A partir del 6 de junio de 2020, el secretario del USDA, Sonny Perdue, informó que las plantas procesadoras de carne "están operando más del 95% de su capacidad promedio en comparación con esta época del año pasado". El New York Times informa que las exportaciones de carne de cerdo y carne de res han aumentado durante los primeros cuatro meses de 2020 en comparación de la misma temporada en 2019. Además, los datos del almacenamiento en frío del USDA hasta el 31 de mayo de 2020, muestran que la cantidad de carne de res y pollo en almacenamiento frío aumentó en comparación con la misma temporada del año pasado, mientras que el inventario de carne de cerdo representaba el 74 por ciento de la cantidad a fines de mayo de 2019.

Según un estudio reciente, los trabajadores negros, latinos y asiáticos representan el 69.6 por ciento (25.2, 44.4 y 10, respectivamente) de los trabajadores de primera línea en las plantas de procesamiento de carne, pero solo el 61.9 por ciento (22.5, 39.4 y 7, respectivamente) de todos los empacadoras de carne, y 28.7 por ciento (11.9, 16.8 y 6.6, respectivamente) de todos los trabajadores son estadounidenses. Por el contrario, los trabajadores blancos están subrepresentados en puestos de primera línea de envasado de carne. Aunque los trabajadores blancos representan el 34.5 por ciento de todos los trabajadores de empacadoras de carne y el 63.5 por ciento de todos los trabajadores de EE. UU., solo el 19.1 por ciento de los trabajadores de primera línea de empacadoras de carne son blancos. Además, más del 73 por ciento de los empleados asalariados de Tyson son blancos, y más del 58 por ciento de la administración de JBS es blanca. Las disparidades raciales no solo influyen en quién corre el riesgo de contraer COVID-19 y propagar el virus en las plantas procesadoras de carne, sino también en quién sufrirá más la enfermedad: las personas negras y latinas son más propensas a sufrir seriamente COVID-19 que las blancas personas debido a las desigualdades sociales, según la denuncia.

La queja administrativa de hoy se presenta ante el USDA, porque cada una de estas megacorporaciones recibió sumas significativas de contratos públicos a través del USDA en los años fiscales 2019 y 2020. El Servicio de Comercialización Agrícola del USDA ha celebrado contratos con las corporaciones bajo varios

Programas de Mitigación Agrícola y Comercial de Farm Bill programas departamentales, cuyo objetivo principal es apoyar los empleos agrícolas y la economía agrícola:

- Tyson recibió \$ 165,756,043 en el año fiscal 2019 y \$ 109,389,928 hasta la fecha en 2020

- JBS y su filial Pilgrim's Pride recibieron \$ 147,643,591 en el año fiscal 2019 y \$ 45,774,572 hasta la fecha en 2020

Todas las corporaciones que reciben asistencia financiera federal están obligadas a tomar medidas que discriminen según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que establece que "ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, será excluidos de la participación, se les niegan los beneficios o se les somete a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal".

"Ahora es el momento en el que nuestro gobierno federal reconozca que esta crisis nacional de COVID-19 está siendo impulsada en gran medida por políticas en las plantas operadas por estas dos corporaciones, y que el sufrimiento y la muerte por coronavirus son principalmente de trabajadores negros, latinos y asiáticos siendo el resultado por Tyson y JBS en busca de ganancias financieras, pero no para mejorar ningún problema de suministro de alimentos domésticos", dijeron los grupos querellantes en una declaración conjunta en la presentación. "Este sufrimiento es uno de los temas que definen la justicia racial en este momento, y esta coalición nacional diversa se enorgullece de tomar medidas hoy para obligar al USDA a hacer cumplir nuestras leyes básicas de derechos civiles para que estas instalaciones funcionen de manera más segura, con políticas que esperamos pronto estará en línea con un estándar OSHA COVID-19 exigible".

"Tyson y JBS podrían proteger la vida de los trabajadores de la cadena alimentaria, respetar los derechos civiles de los trabajadores y continuar operando sus plantas, acorde con todas las pautas del CDC", dijo Brent Newell, Abogado Principal del Proyecto de Alimentos de Justicia Pública y abogado principal de los demandantes en la acción presentada hoy. "En cambio, con el propósito de maximizar las ganancias y la capacidad de procesamiento, estas compañías tratan a los trabajadores de la planta como sacrificio y rechazan el distanciamiento social en las líneas de procesamiento en sus plantas. Estas corporaciones han recibido más de \$ 150 millones de dólares este año en dinero de los contribuyentes y el USDA debe investigar esta injusticia y actuar de inmediato para prevenir futuras enfermedades y muertes de los trabajadores".